

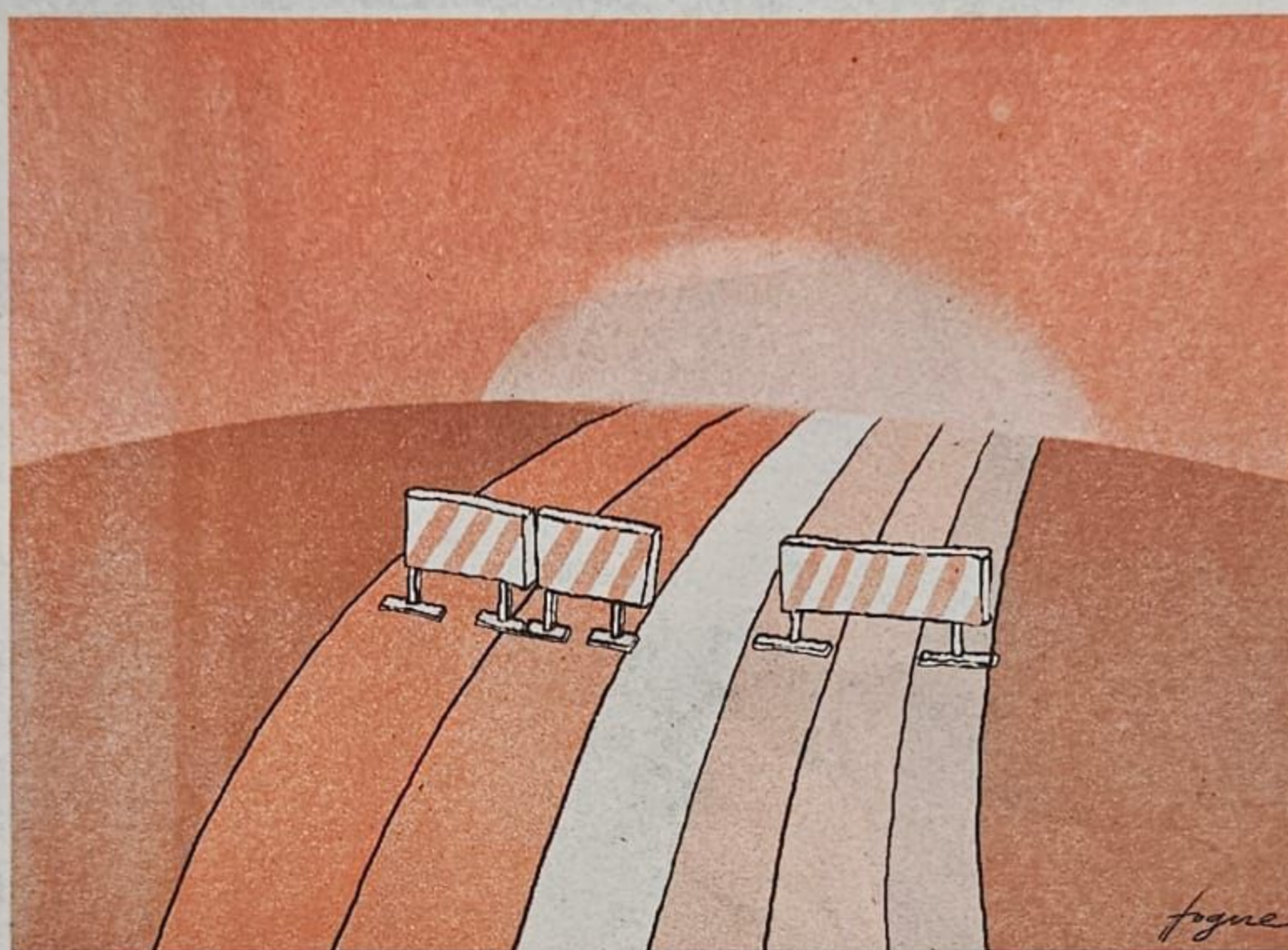
## la columna DE RAMÓN DÍAZ

SOBRE ESTO Y AQUELLO

Si queremos mejorar la eficiencia y la productividad de nuestros recursos, la empresa monopolista no nos sirve

# Desregulación o privatización

**D**esde 1911, cuando se crearon el monopolio de los seguros y el Banco de Seguros del Estado (BSE) para explotarlo, el Uruguay fue cargándose de empresas estatales monopolistas. Pese a que en el mundo se han transformado en una rareza, en el Uruguay siguen gozando de extendido predicamento. De cualquier manera, la opinión mundial ejerce, de una manera u otra, algún grado de presión para que procuremos librarnos de lo que internacionalmente se considera una rémora. Un ejemplo consiste en la reciente concesión de algunas frecuencias para la telefonía internacional, que consisten en una forma tenue de desregulación, y de ninguna manera privatización. El ejemplo sirve, sin embargo, para ilustrar lo que desregulación y privatización tienen de común y de



¿Qué debemos hacer?

¿Será necesario privatizar la empresa estatal, o bastará con quitarle el monopolio?

diferente. Si queremos mejorar la eficiencia y la productividad de nuestros recursos, la empresa monopolista no nos sirve. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Será necesario privatizar la empresa estatal, o bastará con quitarle el monopolio?

A primera vista parece que la opción por la desmonopolización, o desregulación, es admisible. Si la empresa estatal puede competir con las privadas, es que es comparable a ella en eficiencia. Tal vez despilfarraba dinero mientras tenía monopolio, pero al salir del invernadero, y respirar el aire vivificante de la competencia, ha elevado hasta un nivel normal la productividad de sus recursos. En muchos países hay empresas estatales que funcionan razonablemente bien. Al mismo tiempo, el entorno institucional puede ser poco propicio para lograr ese resultado. Procuraré explicar por qué es así en base a un razonamiento teórico y los datos empíricos de la desregulación más importante que ha hecho el Uruguay, que

es la del mercado de seguros, en el cual hasta 1993 el BSE era un monopolio.

El problema que se plantea tiene que ver con los objetivos de las distintas clases de empresas. Los economistas suponen que la meta de las empresas privadas consiste en la maximización de las ganancias. Es una simplificación, pero las deducciones basadas en ella han sido confirmadas por la experiencia. Como la "empresa" es una entidad abstracta, en economía se presume que quienes buscan maximizar los beneficios son las personas de carne y hueso que la dirigen, ya sean accionistas o ejecutivos; y ello porque, de una manera u otra, todos están pecuniariamente interesados en los resultados de la gestión. En base a ese supuesto se infiere que la empresa procurará minimizar costos para cada nivel de producción, y es a partir de esta conclusión que se investiga la curva de oferta.

Con la empresa estatal no puede presumirse lo mismo, ya que ni los directores ni el cuerpo de altos funcionarios tienen ningún grado de participación en las ganancias. Los pioneros de nuestro Estado "empresario" parecen haber abrigado la convicción de que los entes

autónomos cumplirían adecuadamente sus funciones con el interés nacional como único motor; sin embargo: a) esto no significa que se tracen el objetivo de maximizar beneficios, porque a veces la sensibilidad social de los dirigentes se orienta preferentemente hacia beneficiar a los usuarios con precios bajos, inferiores al costo, y otras veces a los proveedores de materias primas, sobre todo cuando son agropecuarias; y b) no parece razonable presumir que los dirigentes de las empresas públicas pertenezcan a un mutante del homo sapiens, cuyos miembros no se ven atraídos por el interés personal. De modo que, si su meta natural no es maximizar ganancias, algo que no les va ni les viene, debe ser otra cosa que, dadas las condiciones en que operan, pueda desempeñar un papel equivalente.

Como esos dirigentes provienen del mundo de la política, y proyectan regresar a él, parece sensato suponer que, durante su interludio empresarial, procuran de todos modos promover sus carreras en aquel ámbito. Y, con ese fin, convencer al público que las empresas a su cargo son grandes empresas. En el caso de un ex monopolista, como el BSE,

cuya participación en el mercado era, por tanto, del 100%, sus dirigentes pugnan, como era de esperarse, por conservar la mayor participación posible. Y para ello están dispuestos a hacer a sus competidores una guerra de precios, y así mantener, p. ej. en automóviles, una participación del 70%, mientras los 7 competidores que ahora tiene en ese ramo apenas han podido morderse una media del 4,3%.

Como el BSE ciertamente no es más eficiente que los privados, y año tras año éstos muestran pérdidas en sus balances, las que sus accionistas deben reponer una y otra vez con nuevos aportes, indudablemente aquél tiene que perder mucho más dinero que éstos. Eventualmente el contribuyente uruguayo tendrá que ponerse para remediar la situación, pero, entretanto, mientras duran las reservas, los directores pueden seguir jugando a la gran empresa. Si el lector, ante ello, se pregunta cómo el gobierno no toma cartas en el asunto, no hay dificultad en responderle: es que el BSE no publica balances, presuntamente tampoco se los muestra al gobierno. Ahora acaba de dar a luz el estado de situación de 1999 —cuando los privados ya presenta-

ron los suyos sobre 2001— y lo ha hecho sin informe de sus auditores externos —la prestigiosa firma KPMG— que se negaron a auditarlo, sin duda porque no se trataba un documento confiable. Mientras tanto el gobierno, que tiene la facultad de dirigir observaciones a los entes, y aun de plantear al Senado la destitución de los directores, no hace nada, y su mutismo es imitado por la oposición. ¿Oyeron hablar de los intocables? Antes eran Elliot Ness y sus muchachos. Ahora son los entes autónomos.

¿Cómo incide la conducta del BSE sobre la corriente de inversión extranjera a nuestro país? Desastrosamente, sin duda. Leandro Suárez, presidente de la gremial de aseguradores privados, y principal en la filial uruguaya de la compañía brasileña PORTO SEGURO, declaró: "Invertimos US\$ 70 millones, dimos trabajo a 650 uruguayos,

¿Oyeron hablar de los intocables? Antes eran Elliot Ness y sus muchachos. Ahora son los entes autónomos

cumplimos con las exigencias que nos establecieron, dimos servicios a la gente que antes no los conocía, y ahora el BSE compite deshonestamente, sin respetar las reglas del propio Estado." Y Jorge González, gerente general de la española MAPFRE, formuló parecidos comentarios, también públicamente. Tenemos en nuestro medio aseguradores de varios otros países. ¿Pueden imaginarse qué comentarios harán los dirigentes de las casas matrices a sus colegas empresarios sobre la suerte que han corrido sus inversiones en el Uruguay? ¿Puede imaginarse que los inversores del exterior que conozcan estos hechos considerarán colocar sus capitales en un país en el cual las empresas públicas se coaligan con el gobierno para esquilmar a los ilusos que arriesgaron allí su dinero? Las preguntas se contestan solas. Y, dígame, lector: el Uruguay es el país de América Latina que recibe menos capital extranjero; ¿le sorprende que sea así?